

ECONOMÍA Y TRABAJO



Margrethe Vestager, vicepresidenta de la Comisión, y Ursula Von der Leyen, presidenta, en noviembre en la sede del Parlamento Europeo en Estrasburgo. / PHILIPP VON DITFURTH (GETTY)

Bruselas planea movilizar 1.600 millones para crear un espacio único para los datos

LLUÍS PELLICER, Bruselas quiere recuperar la soberanía de la materia prima por excelencia del siglo XXI: los datos de sus ciudadanos. La Comisión propondrá crear una gran nube mediante la agrupación e interconexión de las plataformas virtuales, públicas y privadas, de

almacenaje de los Veintisiete para competir con EE UU y China. El Ejecutivo también planea crear un "espacio común europeo" de datos para sectores clave como industria o finanzas. Para ello, prevé invertir 1.600 millones de euros, según el borrador de la estrategia sobre datos al que accedió EL PAÍS.

La Comisión Europea ultima la hoja de ruta para desplegar una batería de medidas en los próximos tres años para subirse al tren del negocio de los datos. Y hacerlo "al modo europeo". Es decir, sin vulnerar derechos ciudadanos. Sin embargo, Bruselas es consciente de que no tiene tiempo que perder. "Si Europa quiere adquirir un papel de liderazgo en la economía de los datos debe actuar ahora", señala el borrador de la comunicación sobre *Una estrategia europea para los datos* que prevé aprobar a mediados de este mes.

La presidenta de la Comisión, Ursula Von der Leyen, encargó a la vicepresidenta segunda, Margrethe Vestager, desarrollar dentro de sus 100 primeros días de mandato este plan junto a una estrategia para el desarrollo de la inteligencia artificial. En el documento, Bruselas se fija como objetivo que en 2030 la proporción de datos "almacenados y procesados" en servidores europeos y el tamaño de la economía que generan se correspondan al menos con el peso de la UE en el mundo, que en 2018 era de cerca del 16,5%. Según un

estudio del *think tank* CEPS, ahora solo el 4% de los datos del continente están albergados en proveedores europeos.

Esa dependencia, según el documento, entraña varios riesgos. Los proveedores están sujetos, por ejemplo, a reglas de jurisdicciones extranjeras, como la *US Cloud Act*, o disposiciones de la legislación china que podría suponer una "divulgación ilegal" de datos europeos. Pero hay otra dimensión que atañe al crecimiento económico: los datos son ya una materia prima, y no solo en el sector tecnológico.

"La diferencia entre el éxito y el fracaso en los próximos cinco años se notará en las próximas décadas, puesto que los datos están en el centro de la transformación digital y son esenciales para la innovación", señala el borrador.

En Europa ha habido intentos de crear una nube que pudiera romper la dependencia de las compañías de la UE respecto a Amazon, Google o Microsoft. Lo intentó Francia, que ahora vuelve a tratar de hacerlo junto a Alemania, cuya canceller, Angela Merkel, ha advertido recientemente de las "dependencias" que se están creando al contratar esos servicios en EE UU.

Sectores clave

Sin embargo, la Comisión cree que el "esfuerzo" de crear un proyecto de tal envergadura "desde cero" no es realista y apuesta por la llamada "federación de capacidades". Es decir, la interconexión de servicios de nube de varios proveedores —tanto públicos como privados— y redes. Esa solución permitiría que siguieran entrando nuevas empresas "altamente competitivas" al mercado a la vez que se favorecen otros objetivos, como el de compartir datos.

Bruselas está dispuesta a estimular esa herramienta, que sostiene que cuenta con un amplio respaldo de la industria y los Gobiernos, con una inversión que este borrador cifra en unos 600 millones de euros en siete años.

Bruselas también se ofrece a buscar sinergias con iniciativas francoalemanas como Gaia-X para evitar la "multiplicación de iniciativas de federación de nubes" que reduzca las posibilidades de éxito de la propuesta de la Comisión.

En esa tarea de facilitar ese proyecto, la Comisión incluso se propone facilitar durante este mismo año memorandos de entendimiento con los Estados miembros. El paso final, que se contempla ya para el segundo trimestre de 2022, pasaría por la creación de un *market place* de esos servicios.

Además de esos 600 millones de euros, Bruselas está dispuesta a movilizar otros 1.000 millones de euros más en los próximos siete años para crear un espacio "común" e "interoperable" para datos en sectores conside-

Escasez de empleados cualificados

El dominio de los grandes grupos internacionales no es el único problema que afronta Europa. El borrador de la comunicación que la Comisión prevé aprobar este mes ve como un obstáculo la fragmentación legislativa europea, frente a la uniformidad de grandes bloques como China o EE UU. Pero también señala la falta de herramientas para "empoderar" a los ciudadanos y que puedan ejercer sus derechos individuales o bien la falta de personal cualificado. Al respecto, la Comisión estima que en 2018 había 571.000 puestos de trabajo sin ocupar en áreas de *big data* y análisis en la Unión Europea (incluyendo el Reino Unido).

rados como estratégicos. En concreto, el texto señala el sector manufacturero, la economía verde, la movilidad, la salud, las finanzas, la energía, la agricultura y la contratación pública.

En ese apartado, no obstante, la Comisión todavía debe formular propuestas más concretas mediante las aportaciones que le hagan desde cada uno de los departamentos. Sin embargo, si apunta que deberá clarificarse el uso legal de datos para fines industriales, que en 2027 estima que supondrán un mercado de 1,5 billones de euros.

En parte, eso deberá abordarse en varias iniciativas legislativas que el Ejecutivo comunitario piensa desplegar en los próximos años. En el tercer trimestre de este año espera dar el visto bueno a una propuesta para un sistema de gobernanza de un espacio común europeo de datos, que irá acompañado de un análisis sobre el impacto de la acumulación de datos por parte de las grandes tecnológicas.

A comienzos de 2021, Bruselas prevé tener listo el borrador de una ley digital que tenga en cuenta asuntos sensibles como la posibilidad de que las empresas compartan datos con los Gobiernos.

OPINIÓN / SANTIAGO CARBÓ VALVERDE

Año duro para la banca

La banca parece seguir abocada a realizar una serie de trabajos hercúleos que lleva acometiendo desde hace una década y, como el héroe griego, trata de encontrar un entorno más tranquilo en el que recuperar el aliento. El beneficio neto conjunto de las seis mayores entidades financieras españolas en 2019 fue de 13.592 millones, un 18,4% menos que en el ejercicio anterior. El sector puede asumir los condicionantes que afectan negativamente a su rentabilidad, pero también aspira a un campo de juego en el que haya un nivel de oxígeno financiero y competitivo razonable.

Entre las cargas que se asumen y de las que cuesta desprenderse destacan las que son herencia de la Gran Recesión. Por un lado, el deterioro de activos, del que buena parte del trabajo parece hecho u ordenado. Por otro lado, la no siempre adecuadamente ponderada distribución de responsabilidades de la crisis y los efectos sobre su imagen. Es este un problema que, además, convierte al sector, en ocasiones, en blanco de una vindicación política. Asimismo, hay una clara conciencia de que, como la mayor parte de empresas de servicios, los de intermediación financiera tienen que avanzar por la vía de la digitalización, con estructuras más ligeras.

Sin embargo, otro tipo de limitaciones aparecen con una concurrencia e intensidad más controvertidas. El cuarto trimestre del pasado año fue un fiel reflejo. Antes de enfilar la recta final del ejercicio la expectativa de gran parte del sector financiero era que los bancos centrales propiciarían un cambio monetario que contribuyera a una mayor normalización. En particular, ir dejando atrás los tipos negativos y las medidas expansivas. No solo no se produjo, sino que se ha seguido avanzando por la vía de la laxitud monetaria. Según datos de ayer del Banco de España, el euríbor siguió en negativo en enero (-0,25%) y hubo un aumento interanual del crédito a hogares (0,2%) y empresas (0,5%), que venía cayendo desde septiembre (tras haber crecido los 16 meses anteriores) por la caída de expectativas económicas que refrendó el nuevo bandazo monetario.

Otro elemento que aporta peso al vuelo bancario es la regulación. No se pone en

duda —ni desde el propio sector— que la reordenación normativa poscrisis tuvo muchos elementos necesarios para restaurar la estabilidad financiera y la confianza a largo plazo. Pero el cumplimiento normativo comienza a alcanzar un peso burocrático con solapamientos y no siempre razonado, y, sobre todo, parece tener poco sentido hablar de nuevos impuestos especiales para la banca. Además de contribuir tributariamente como el resto de empresas, las aportaciones al seguro común (el fondo de garantía de depósitos) de los bancos son cuantiosas (1.100 millones en 2019).

Justo estaba la banca esperando un año de cierta remontada y la mayor parte de analistas apostaban por una importante recuperación de valor bursátil, cuando la macroeconomía y la inercia monetaria siguen presionando a la baja a corto plazo. La expectativa sigue siendo de mejora a largo plazo, pero, en el corto, hay notables obstáculos.